



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

**Título del trabajo: El artículo 155 de la
Constitución Española y su aplicación en
Cataluña.**

Autor

Marc Belío Bergada

Director

Eva Sáenz Royo

Facultad de Derecho

2017-2018

SUMARIO

- I. Listado de abreviaturas a emplear a lo largo del trabajo.
- II. Razón de la elección del tema y justificación.
- III. Antecedentes históricos de la coacción estatal.
- IV. La introducción del art. 155 en la Constitución española.
Debates constituyentes
- V. Análisis del art.155 de la CE.
 - V.1) Presupuestos materiales para su aplicación.
 - V.2) Procedimiento para su ejercicio.
 - V.3) Medidas de compulsión.
 - V.4) Recursos frente a su ejercicio.
- VI. La aplicación del art.155 de la CE en Cataluña.
- VII. Conclusión.
- VIII. Bibliografía
 - VIII.1) Libros y Artículos de Revista
 - VIII.2) Recursos de Internet
 - VIII.3) Jurisprudencia

I. Listado de abreviaturas a emplear a lo largo del trabajo.

CA. Comunidad Autónoma.

CE. Constitución Española.

CEDA. Confederación Española de Derechas Autónomas.

C's. Ciudadanos.

CUP. Candidatura de Unitat Popular.

EE.AA. Estatutos de Autonomía.

ERC. Esquerra Republicana.

LFB. Ley Fundamental de Bonn.

LOTIC. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

PEdCAT. Partido Demócrata de Cataluña.

PNV. Partido Nacionalista Vasco.

PP. Partido Popular.

PSC. Partido Socialista de Cataluña.

PSOE. Partido Socialista Obrero Español.

PYMES. Pequeñas y Medianas Empresas.

STC. Sentencia del Tribunal Constitucional.

STGC. Sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales.

TC. Tribunal Constitucional

TFG. Trabajo Fin de Grado.

TGC. Tribunal de Garantías Constitucionales.

UCD. Unión Centro y Democracia

II. Razón de la elección del tema y justificación.

Tras haber transcurrido gran parte de mi etapa como graduado y encontrarme ya en el epílogo del grado, he tenido que decidirme por la elección de un tema para el menester que nos ocupa, el Trabajo de Fin De Grado.

A lo largo de toda mi experiencia universitaria, he cursado diversidad de asignaturas de muy diferentes contenidos y más en mi condición de doble graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, en la cual he podido combinar materias jurídicas y económicas. Esto me ha permitido analizar la cuestión desde distintas perspectivas, por ello, al centrarme en el área de Derecho Constitucional, podré analizar la cuestión desde un enfoque político y jurídico.

Una vez establecida la rama del Derecho en la cual defender mi TFG, tendría que seleccionar un tema concreto, para su desarrollo y explicación. Dada la actual trascendencia que ha supuesto y sigue suponiendo la deriva independentista catalana, entendí que esta cuestión encajaba plenamente en mis objetivos académicos.

De todos los hechos producidos en este conflicto, hay uno que sin duda ha resultado ser centralizador de todas las opiniones político-jurídicas: la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

La selección de este contenido obedece a las siguientes razones: una temática de rabiosa actualidad, la aplicación de un concepto jurídico novedoso que no ha tenido precedentes en toda la historia de nuestra democracia, y un tema con un evidente carácter político, al haber sido aplicado este artículo en un contexto con un fuerte conflicto político-social entre el Gobierno de la Nación y el *Govern de la Generalitat*.

De esta forma, analizando la aplicación del artículo 155 de la CE en Cataluña, se van a poder plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi etapa como estudiante de Derecho. Para determinar y efectuar una valoración razonada en Derecho sobre si la aplicación del artículo 155 de la CE ha resultado ser constitucional, o por lo contrario, ha vulnerado la Constitución Española.

Para conseguir la finalidad expuesta en este TFG, se hará una breve descripción histórica sobre el origen de la coacción estatal tanto a nivel comparado como a nivel nacional. Tras ello, se definirá en qué consiste el artículo 155 de la CE. Con este objetivo se realizará un análisis doctrinal sobre los presupuestos materiales de aplicación, procedimiento para su ejercicio, medidas de compulsión y los posibles recursos oportunos frente a su aplicación. Todo esto nos permitirá valorar la aplicación constitucional del art.155 de la CE por parte del Gobierno Español frente a los actos secesionistas llevados a cabo por el *Govern de la Generalitat*. Terminará el trabajo con unas conclusiones.

La metodología que se ha seguido para la realización de este trabajo se basa fundamentalmente en la consulta de diversas fuentes. Así, se ha consultado la legislación vigente, tomando en especial consideración los Acuerdos adoptados tanto por el Consejo de Ministros y del Senado para la aplicación del artículo 155 de la CE, los Reales Decretos de designación de órganos y autoridades encargadas de dar el cumplimiento de medidas, de convocatoria de elecciones y también la Orden de cese de Jefe Mayor de los *Mossos d'Esquadra*. Igualmente para el análisis jurídico de los preceptos en juego se han utilizado diversos trabajos doctrinales, artículos de prensa y Jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

III. Antecedentes históricos de la coacción estatal.

En Estados políticamente descentralizados se entiende por coacción estatal -también denominada coerción o compulsión estatal- un mecanismo en manos del gobierno central para someter a las unidades territoriales que se desligan del ordenamiento constitucional.¹ Se trata de un mecanismo extraordinario que tiene como objetivo garantizar los principios de unidad territorial, autonomía y lealtad sobre los que se sustenta la descentralización política.

La figura de la coacción estatal es necesaria distinguirla de otras facultades otorgadas a las autoridades centrales y que cumplen otros objetivos. En primer lugar, la coacción estatal es diferente de la intervención federal del gobierno central de tipo militar o policial ante una injerencia interna o externa, cuando la unidad territorial correspondiente no puede hacer frente a un conflicto determinado. En este caso, la intervención federal no entra en juego por una infracción de la lealtad federal sino por una insuficiencia de capacidad de la respuesta ante una agente interno o externo perturbador². Esta facultad se encuentra presente en EEUU en art. IV.4³ de su Constitución. En segundo lugar, hay que distinguir la coacción estatal de la llamada supervisión federal. Esta última es una facultad de las autoridades centrales para efectuar una inspección de cómo se lleva a cabo la ejecución de las leyes federales por parte de las unidades territoriales⁴. Esta facultad se encuentra presente en Estados como Alemania en el art.84⁵ de la Ley Fundamental de *Bonn*.

La figura de la coacción estatal aparece a principios del s. XX en la Constitución de

¹ VÍRGALA, E. , «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución» , *Revista Española de Derecho Constitucional (Nueva Época)* , núm.73 , Madrid , Enero-Abril 2005 , págs. 80.

² MUÑOZ, S. , *Derecho Público de las Comunidades Autónomas* , Tomo I , Madrid , Civitas , 1982 , pág. 456.

³ “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado de esta Unión una forma de gobierno republicano, y protegerá a cada uno de ellos en contra de invasiones; y a solicitud de la Legislatura, o del Ejecutivo contra disturbios internos.”

⁴ VÍRGALA, E. , «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución» , cit. , págs. 55-110

⁵ “Cuando los *Lander* ejecuten las leyes federales como asunto propio, regularán la organización de las autoridades y el procedimiento administrativo. Si las leyes federales establecen otra cosa, los *Lander* pueden adoptar normas divergentes. Cuando un *Land* haya adoptado una norma divergente según la frase 2, normas federales posteriores, referidas a ella, sobre la organización de las autoridades y del procedimiento administrativo entrarán en vigor en este *Land* no antes de seis meses después de su promulgación, salvo que se determine otra cosa con la aprobación del *Bundesrat*. Artículo 72, apartado 3, frase 3, se aplica por analogía. En casos excepcionales, la Federación puede regular el procedimiento administrativo sin posibilidad de divergencia por los *Lander* cuando haya una necesidad especial de una normativa uniforme en la Federación. Estas leyes requieren la aprobación del *Bundesrat*. No se pueden transferir tareas por ley federal a los municipios y a las asociaciones de municipios.”

Weimar. Su artículo 48⁶ establecía “el derecho del *Reich* a intervenir con el uso de la fuerza armada ante el incumplimiento de las obligaciones del *Reich*, las leyes y de la Constitución”. Este artículo establecía como supuesto de hecho, no una vulneración de las obligaciones de un *Land* sino la concurrencia de que la seguridad pública sea notablemente perturbada o puesta en peligro.⁷ La arbitrariedad que se establecía en dicho artículo junto al ascenso de poder de la ideología nazi conllevó a otorgar poderes dictatoriales al *Reich*, y como respuesta, un uso indebido de este instrumento frente a situaciones que no requerían su aplicación como fue el periodo de inestabilidad política⁸ causado por la imposibilidad de formación de gobierno en Prusia en la primera mitad del s. XX.

Actualmente, el artículo 37 de la Ley Fundamental de *Bonn* faculta al gobierno central a intervenir ante vulneraciones de la Constitución y las leyes federales por un *Land*. No obstante, su intervención debe hacerse previa aprobación del *Bundesrat*, en situaciones más limitadas y con instrumentos más democráticos de los anteriormente previstos en la Constitución de *Weimar*.

Artículo 37

“1.Si un *Land* no cumple los deberes federales que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno Federal, con la aprobación del *Bundesrat*, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al *Land* al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal.

2.Para la ejecución de las medidas federales coactivas, el Gobierno Federal o su representante tiene el derecho de impartir instrucciones a todos los *Lander* y a las autoridades de los mismos”.

Este artículo ha servido en gran parte de referencia a la actual redacción del art.155 de la

⁶ “1.En el caso de un estado que no cumpla con los deberes que le haya impuesto el Reich, la Constitución o las leyes del Reich, el presidente del Reich podrá hacer uso de las fuerzas armadas para compelerlo a hacerlo 2.Si la seguridad y el orden público del interior del Reich son severamente dañados o están en peligro, el presidente del Reich podrá tomar las medidas necesarias que lleven a restablecer el orden, interviniendo con la asistencia de las fuerzas armadas, de ser necesario.”

⁷ La escuela *schmittiana* era favorable a la aplicación conjunta del art.48.1 y art.48.2, ya que entendía que la perturbación del orden público conlleva una responsabilidad (de tipo objetivo) del *Land*, y por tanto, una violación de las obligaciones constitucionales (art. 48.1) y, también, que cualquier incumplimiento de la Constitución por un *Land* suponía una alteración del orden público que podía dar lugar al art.48.2.

⁸ VÍRGALA, E. , «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución» , cit. , págs. 62-68.

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

Constitución Española.

También, países como Austria reconocen, en el art. 100 de su Constitución⁹, la facultad de disolver los Parlamentos de los *Länder*, por iniciativa del Gobierno Federal, mediante la aprobación de 2/3 de los votos del parlamento Federal. En Italia se posibilita, en el art.126 de la Constitución¹⁰, la facultad del Presidente de la República a disolver y remover al presidente del gobierno regional que cometa actos contrarios a la Constitución o graves violaciones de la ley, siempre previa audiencia de una Comisión de diputados y senadores. Mas genéricamente el artículo 49 de la Constitución Suiza señala que “la Confederación velará por que los Cantones respeten el Derecho Federal”.

Por otra parte, a lo largo de toda la historia del constitucionalismo español, a diferencia de otros países como Alemania, apenas ha existido referencia alguna a la coacción estatal. La primera presencia de este instrumento cabe mencionarla en la II República Española y no recogida explícitamente en el texto Constitucional de 1931 sino que se hizo uso de dicha técnica mediante la aprobación de la Ley 2 de enero de 1935.

En un contexto severamente conflictivo, como consecuencia de una huelga general producida por la entrada de varios ministros de la CEDA al Gobierno republicano, *Companys, President de la Generalitat de Catalunya*, asume el 6 de octubre de 1934 «todas las facultades de Poder en Cataluña, proclama el Estado catalán de la República Federal española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta

⁹ “1. Toda Dieta Regional podrá ser disuelta, a instancias del Gobierno federal y con la aquiescencia del Consejo federal, por el Presidente federal. La conformidad del Consejo Federal se acordará en presencia de la mitad de sus componentes y por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. No podrán tomar parte en la votación los representantes del Estado cuya Dieta Regional se trate de disolver. 2. Si se acuerda la disolución, se convocarán elecciones dentro de un lapso de tres semanas, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución del Estado en cuestión, y se convocará a la Dieta Regional recién elegida dentro de las cuatro semanas siguientes a la elección.”

¹⁰ “Se acordarán por decreto motivado del Presidente de la República la disolución del Consejo Regional y la remoción del Presidente de la Junta que hayan realizado actos contrarios a la Constitución o incurrido en violaciones graves de la Ley. Podrán asimismo la disolución y la remoción ser acordadas por razones de seguridad nacional. El decreto se adoptará una vez oída una Comisión de diputados y senadores constituida para las cuestiones regionales, según las normas establecidas por Ley de la República. El Consejo Regional podrá expresar su desconfianza en el Presidente de la Junta por medio de moción motivada, rmada por la quinta parte, como mínimo, de sus miembros, y aprobada por la mayoría absoluta de los componentes. La moción no podrá ser discutida antes de haber transcurrido tres días desde su nombramiento. Se considerarán dimitida la Junta y disuelto el Consejo por aprobación de la moción de desconfianza en el Presidente de la Junta elegido por sufragio universal y directo, así como por remoción, impedimento permanente, muerte o dimisión voluntaria del mismo. El mismo efecto surtirá en todo caso la dimisión conjunta de la mayoría de los componentes del Consejo.”

general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República»¹¹. Esta conducta condujo al Gobierno Republicano, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, a dictar la Ley de 2 de enero de 1935 por la cual efectuaba la suspensión del régimen de autonomía catalán. Destacar, a modo complementario, que la hipotética declaración de independencia que comúnmente se habla, jurídicamente no resulta ser una desvinculación completa con el estado Español, sino simplemente una asunción de autonomía plena¹², contraria eso sí a la legalidad constitucional imperante de entonces.

La Ley de 2 de enero de 1935 fue utilizada como un instrumento de coacción estatal sin ser recogida explícitamente en la Constitución. Por ello, el TGC la declaró inconstitucional¹³, al entender que suponía una derogación tácita del Estatuto de Autonomía Catalán y del modelo de organización territorial constituido en el art. 11 de la Constitución de 1931, estableciendo «un régimen intermedio inconstitucional entre la autonomía y el derecho común». El propio Tribunal reconoce que la competencia para efectuar dicha modificación debería de encontrarse prevista en la Constitución, legitimadora propia de la autonomía catalana, o ser aprobada por el parlamento catalán, y no mediante los cauces de una Ley Ordinaria Estatal. A pesar de lo dicho, en la misma sentencia, se dictó un voto particular firmado por 6 miembros¹⁴, en el que al margen de una argumentación deficiente, reconoce la necesidad de proveer al Gobierno Republicano de los instrumentos precisos para responder ante las gravísimas acometidas revolucionarias «cuya responsabilidad correspondía exclusivamente a la propia *Generalitat* de Cataluña». ¹⁵

Esta segunda apreciación concuerda con la tesis efectuada por P. Cruz Villalón, reconociendo la no necesidad de la presencia explícita del artículo de la coacción estatal para su posible aplicación, «se deriva de la misma radicación de la soberanía y de la

¹¹ Sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) de 6 de junio de 1935, en BASSOLS COMA, M. *La Jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, pág. 175.

¹² BASSOLS COMA, M. *La Jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española*, cit., pág. 65.

¹³ Sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) de 6 de junio de 1935, en BASSOLS COMA, M. *La Jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española*, cit., pág. 39.

¹⁴ Miembros del Voto Particular: CÉSAR SILIÓ, E. MARTÍNEZ SABATER, PEDRO J. GARCÍA, GIL GIL, VÍCTOR PRADERA, CARLOS MARTÍN ALVAREZ.

¹⁵ Voto particular a la Sentencia del TGC de 5 de marzo de 1936, en BASSOLS COMA, M. *La Jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española*, cit., págs. 128-129.

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

consiguiente competencia de garantía de seguridad interior».¹⁶ En definitiva, este instrumento no se constituye por la mera dicción en la Constitución sino que únicamente tiene un efecto declarativo, al proveerse ante determinadas circunstancias de un estado de necesidad.

IV. La introducción del art. 155 en la Constitución española. Debates constituyentes

Las Cortes Constituyentes de 1978 entendieron necesario imponer una cláusula de coacción estatal, similar a la establecida en el art.37 de la LFB, como consecuencia de la instauración del régimen territorial descentralizado. Dicha redacción coincide casi plenamente con la establecida en la ley alemana, por ello, compartirán muchas características.

El artículo referente a la coacción estatal de la Constitución Española se encuentra enmarcada en el Título VIII “De la Organización Territorial del Estado”, en el Capítulo III “De las Comunidades Autónomas” y en particular en el art.155.

La redacción primigenia del art.155, en el Anteproyecto de Ley se encontraba establecida en el art.144:

Artículo 144

“1.Si un Territorio Autónomo no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otra ley le imponga respecto del Estado, el Gobierno, con la aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Territorio Autónomo al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

2.Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de los Territorios Autónomos”.

¹⁶ CRUZ VILLALÓN, P. , «Coerción Estatal» en J.J. González Encinar (ed.) , *Diccionario del Sistema Político Español* , Madrid , Civitas , 1984 , págs. 689-717.

La definitiva redacción que se adoptó fue la siguiente:

Artículo 155

“1.Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2.Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

Se comprueba en el análisis de ambos artículos la inclusión de varios matices durante el transcurso de los debates constituyentes. En este sentido se añade como supuesto de aplicación el caso de que una Comunidad Autónoma atente «gravemente al interés general de España». También se incluyen la comunicación previa al Presidente de la Comunidad Autónoma y la necesidad de una mayoría absoluta por parte del Senado para adoptar las medidas respectivas.

El supuesto de que una Comunidad Autónoma atente gravemente al interés general de España, no se encontraba presente en la LFB, por tanto, debe de calificarse como una innovación propia española. Su inclusión fue propuesta por el Grupo de la UCD y entendía un nuevo supuesto de intervención, añadido al supuesto de vulneración de las obligaciones legales y constitucionales. En los Debates Constituyentes su inclusión supuso diversidad de protestas. Ejemplo de ello son las afirmaciones que realizó el senador Audet Puncernau en representación del Grupo de *Entesa dels Catalans*:

«En base a este artículo es posible tomar cualquier medida arbitraria. En efecto, ¿quién puede decidir cuál es el interés general de España? Precisamente en España, en nombre de supuestos y caprichosos intereses generales, se han llevado a cabo grandes barbaridades. Todavía tenemos presente, muchos de nosotros bien presente, la última guerra civil española».¹⁷

También el diputado de *Euskadiko Ezkerra*, el Sr. Letamendía Balzunce abogaba por la

¹⁷ Constitución Española, Trabajos parlamentarios, Madrid, Cortes Generales, 1980, vol.II, págs. 344-350

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

supresión de esta cláusula: «una Comunidad Autónoma puede cumplir perfectamente las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan y, sin embargo, puede atentar gravemente al interés general de España, lo cual no se entiende»¹⁸. Por contra, Perez-Maura Herrera por parte del Grupo UCD defendió su inclusión :

«Y en cuanto al interés general de España, creo que indudablemente no es un interés particular lo que aquí se señala; se llama un atentado grave al interés general de España. Esto debe quedar claro.[...]. En una palabra, entendemos que este artículo en su conjunto supone una mejora sobre el Congreso, una posibilidad de diálogo mayor, y , al mismo tiempo, una garantía para las Comunidades Autónomas dentro de la Constitución autonómica que es el modelo que nosotros pretendemos. Nada más y muchas gracias».¹⁹

Respecto a la otra novedad introducida durante los debates constituyentes, la comunicación previa al Presidente de la Comunidad Autónoma, fue propuesta por el Grupo de *Entesa dels Catalans*. Se señaló que:

«Parece evidente que una medida tan grave como la que contempla este artículo, que puede provocar situaciones muy conflictivas, no pueda tomarse sin requerir antes al Presidente de la Comunidad Autónoma, que ostenta precisamente en ella la representación ordinaria del Estado».²⁰

Esta prevención fue acogida de manera positiva por diversidad de grupos parlamentarios. Por parte del PNV, se comprueba de las manifestaciones del Sr. Monreal Zia:

«Queremos destacar las ventajas propias de toda audiencia: hemos de referirnos, por ejemplo, a los elementos de información que a través de ella capta el legislador en relación con una situación que ha de influir necesariamente en una correcta política legislativa y, en este caso, más armonizadora. Queremos destacar, igualmente, que la audiencia contribuye a la aceptación de los principios armonizadores por parte de los beneficiarios de las normas, aceptación más importante en cuanto que van a ser los afectados directamente por las mismas. Queremos poner de relieve, por último, la incoherencia que se daría al atribuir un trámite de audiencia y de interlocución a los actuales regímenes preautonómicos y negarlo al régimen definitivo de autonomías».²¹

Por parte de UCD, se pronunció en el mismo sentido de Perez-Maura Herrera:

«Dicho requisito tampoco se encontraba presente en el texto constitucional alemán. Quisiera recordar al Senador Audet que las enmiendas introducidas a este apartado 1 lo han sido a iniciativa de la *Entesa dels Catalans*, que de acuerdo, y con unanimidad de los demás Grupos políticos, introdujeron, en primer lugar, un pequeño párrafo que, a mi

¹⁸ Constitución Española, Trabajos parlamentarios , cit. , vol.II , págs. 1.681-1.682

¹⁹ Constitución Española, Trabajos parlamentarios , cit. , vol.II , pág.4926.

²⁰ Constitución Española, Trabajos parlamentarios , cit. , vol.II , pág.3006

²¹ Constitución Española, Trabajos parlamentarios , cit. , vol.II , pág.4231.

juicio y al de nuestro Grupo, es altamente positivo». ²²

Por último, la enmienda sobre la exigencia de mayoría absoluta por parte del Senado para adoptar las medidas respectivas fue presentada por el Grupo UCD. Esta enmienda fue propuesta por la senadora Revilla López, la cual manifestó que «con esta adición no se modifica en absoluto el contenido del artículo, sino que únicamente se completa su redacción. Se trata, pues, de una enmienda puramente gramatical, pero necesaria». ²³

Junto a ella, se presentó otra enmienda referida a la posibilidad de recurrir al TC la aprobación del Senado. Esta enmienda se justificaba en: «Las modificaciones que se proponen en este apartado introducen unos elementos de garantía, pues el desarrollo de las competencias de los territorios autónomos mantienen para los casos que se contemplan las actuaciones pertinentes por parte del Gobierno». ²⁴ Finalmente, debido a presiones por parte de UCD que entendía que se encontraba ya reconocida en el art.161 de la CE (hace referencia al recurso de inconstitucionalidad), fue desechada por parte de la Comisión Mixta.

²² *Constitución Española, Trabajos parlamentarios*, cit., vol.II, pág.4926.

²³ *Constitución Española, Trabajos parlamentarios*, cit., vol.II, pág.1682.

²⁴ *Constitución Española, Trabajos parlamentarios*, cit., vol.I, pág. 389

V. Análisis del art.155 de la CE.

V.1) Presupuestos materiales para su aplicación.

El art.155 de la Constitución Española impone la coacción estatal a las Comunidades Autónomas que no cumplan con las obligaciones que la Constitución u otras leyes les impongan, o que actúen de forma que atenten gravemente al interés general de España. Este extracto del párrafo primero alude a la necesidad de la existencia de una conducta por parte de la Comunidad Autónoma que bien, incumpla las obligaciones de la Constitución y de las leyes, o bien, actúe atentando gravemente el interés general de España para poder aplicar la coacción estatal.

En referencia a la primera de las cuestiones se pone de manifiesto la necesidad de una conducta imputable a una Comunidad Autónoma como ente territorial. La conducta podrá efectuarse en su modalidad positiva o negativa, es decir, activa u omisiva. Del propio tenor literal, se comprueba la facultad de manifestarse de ambas formas, al hacerse mención a «no cumplir» (negativamente) y «actuar» (positivamente). Es necesario añadir que el incumplimiento de las obligaciones o el atentado contra el interés general deberá de ser efectivo y grave, no admitiéndose peligros o presunciones abstractas de incumplimiento.

En cuanto a la necesidad de la concurrencia de dolo o culpa, E. Vírbara²⁵ entiende que «el incumplimiento ha de ser subjetivo, es decir, a título de dolo o culpa y no un mero incumplimiento objetivo en el que la Comunidad Autónoma no pudiera cumplir sus obligaciones²⁶, ya que en el supuesto de imposibilidad objetiva de cumplimiento, la Comunidad Autónoma reclamaría la ayuda del Estado sin necesidad de aplicar el art.155 CE». Esta tesis se contrapone a la doctrina alemana del art.37 de la LFB, la cual no requiere un incumplimiento subjetivo.

²⁵ VÍRGALA, E. , «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución» , cit. , págs. 80.

²⁶ En contra, GARCÍA TORRES, J. «El artículo 155 de la Constitución y el principio constitucional de autonomía» , Organización territorial del Estado , Instituto de Estudios Fiscales , volumen II , Madrid , 1984 , pág. 1263 ; en el mismo sentido, ALBERTÍ, R. , *El Sistema Jurídico de las Comunidades Autónomas* , Tecnos , Madrid , 1985, pág. 473 , BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies , Estudi de l' Article 155 de la Constitució de 1978* , Barcelona , *Escola d' Administració Pública de Catalunya* , 1987 , pág. 108.

E. Albertí²⁷, en referencia a la imputabilidad de la conducta, señala que «debe de ser imputable a la Comunidad Autónoma como unidad» en su esfera político-territorial, es decir, a sus órganos superiores como el Presidente²⁸ y Gobierno Autónomo²⁹ siempre que no se trate de actos normativos que puedan recurrirse jurisdiccionalmente.

Este planteamiento tiene su justificación en la existencia de mecanismos internos de corrección para los órganos integrantes, por ello, no cabría aplicarlo frente a Consejeros, al tener el Presidente de la CA la posibilidad de designación y cese. A diferencia, para los actos realizados por las Asambleas Legislativas Autónomas que vulneren las obligaciones constitucionales y legales, no cabe la aplicación del art.155 de la CE, previendo para este caso la resolución del conflicto mediante un recurso de inconstitucionalidad³⁰.

Antes de analizar los dos posibles supuestos de aplicación, hay que señalar que la facultad de uso de la coacción estatal debe fijarse con carácter excepcional o de *ultima ratio*, cuando no exista otra medida que permita solucionar el conflicto en cuestión. Así lo ha establecido el TC como «mecanismo extraordinario de coerción» en Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1988 FJ.31. Esta característica es propia en la legislación española, diferenciándose de otros ordenamientos como el alemán³¹.

Respecto a la primera circunstancia que permite la aplicación del artículo 155 «el incumplimiento de las obligaciones constitucionales o legales» que se denominará «norma de sujeción», analizaremos a continuación cuál es el objeto del posible incumplimiento.

El término «obligaciones constitucionales» debe interpretarse de una forma extensiva³² incluyendo la Constitución y el bloque de constitucionalidad (EE.AA., y demás leyes que

²⁷ ALBERTÍ, R. , *El Sistema Jurídico de las Comunidades Autónomas* , cit. , pág. 473.

²⁸ BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies* , cit. , pág. 97.

²⁹ BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies* , cit. , pág. 97.

³⁰ BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies* , cit. , pág. 97 .

³¹ BVERFGEE negando el carácter excepcional del art.37, véase STERN, K. *Das Staatsrecht Der Bundesrepublik Deutschland* , BAND I , ED. CH. BECK , 1977, pág. 560

³² BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies* , cit. , págs. 125-126 .

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

modifiquen la distribución de competencias)³³. En cambio, la obligación legal debe de aclararse de forma restrictiva en cuanto a la fuente de la norma. E. Virgara³⁴ menciona que «el término «leyes» ha de interpretarse restrictivamente en cuanto al rango de la norma afectada, es decir, ha de tratarse de normas, al menos, con rango de ley, no siendo equivalentes a éstas ni los acuerdos o convenios con el Estado ni los Reglamentos». De esta forma, se podrá aplicar el art.155 de la CE frente a la vulneración de cualquier tipo de leyes aprobadas por las Cortes Generales o por los Parlamentos Autonómicos³⁵. La norma de sujeción del art.155 de la CE se diferencia de la del art.37 de la LFB, en cuanto que hace referencia a normas del Estado total³⁶, esto es, normas que amparan a los sujetos del Estado Autonómico mientras que LFB identifica «ley» con «leyes federales», limitándose únicamente a leyes adoptadas por el Estado Central.

También, en referencia a las fuentes internacionales, frente a la vulneración de la legislación comunitaria como de los tratados internacionales³⁷, cabría la posibilidad a aplicar la coacción estatal establecida en el art.155 de la CE.

Faltaría por mencionar para este primer supuesto, la necesidad de recabar como paso previo a su interposición³⁸ la obtención de una sentencia judicial firme por parte bien del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional o Tribunal Superior de Justicia que acredite la existencia del incumplimiento de las obligaciones legales o constitucionales. Dentro de la casuística cabría destacar la necesidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad con efectos de suspensión frente a la aprobación de una ley autonómica, un recurso contencioso frente a un acto administrativo, la impugnación directa del art.162.1 CE, por la invasión de competencias, interponer un conflicto positivo de competencias con suspensión de la norma afectada, mientras que por la omisión de competencias plantear un conflicto negativo de competencias³⁹.

³³ ÁLVAREZ, E., «La Coerción Estatal del art.155 CE en la Estructura del Estado Autonómico», UNED, *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 38, Madrid, 2006, págs. 280.

³⁴ VÍRGALA, E., «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución», cit., págs. 90.

³⁵ VÍRGALA, E., «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución», cit., págs. 90.

³⁶ KELSEN, H., *Die Bundesexekution* en Z. GIACOMETTI y D. SCHINDLER (eds) *Festgabe für Fritz Fleiner zum 60 Geburtstag*, JCB Mohr, Siebeck, 1927, págs. 129-136.

³⁷ VÍRGALA, E., «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución», cit., págs. 90.

³⁸ VÍRGALA, E., «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución», cit., págs. 88.

³⁹ BALLART, X., *Coerció Estatal I Autonomies*, cit., pág. 104-106.

La segunda de las circunstancias apreciables que permite su aplicación es el atentado «contra el interés general de España» que se denominará «norma de lealtad».

Amén de interpretaciones extremas, como las realizadas por P. Cruz Villalón, señalando que dicha cláusula supone «plenos poderes» a favor del Ejecutivo o el inicio de «la dictadura constitucional»⁴⁰, este supuesto se puede equiparar a una vulneración de las obligaciones legales o constitucionales como entiende X. Ballart⁴¹ que interpreta la conjunción «o» del art. 155 de la CE no como una conjunción alternativa sino como equivalencia «o sea». De acuerdo a esta tesis, la aplicación del art.155 de la CE sólo se efectuaría cuando la vulneración de las obligaciones legales o constitucionales supusieran un grave atentado contra interés general de España.

Otra posible interpretación es la realizada por E. Virgara⁴², afirmando que para la aplicación del supuesto en mención, además de una vulneración de las obligaciones legales o constitucionales, sería procedente la apreciación de una graduación superior de incumplimiento que suponga una quiebra del ordenamiento constitucional referente a las instituciones básicas del Estado, como el reparto político o marco constitucional.

De esta forma, habiendo sido analizados los dos supuestos de hecho descritos en el art.155 de la CE y teniendo presente el carácter extraordinario de la medida, supone sostener que las infracciones legales o constitucionales que se efectúen deberán de requerir una transgresión bien cuantitativa o cualitativa del ordenamiento. Esto conllevará la disolución de la norma de sujeción (infracción de las obligaciones legales o constituciones) en la norma de lealtad (interés general de España), haciendo necesario para la aplicación del art. 155 de la CE la concurrencia de los dos requisitos simultáneos, que la vulneración de las obligaciones legales o constitucionales supongan un atentado grave contra el interés general de España⁴³.

⁴⁰ CRUZ VILLALÓN, P. , «La Protección Extraordinaria del Estado», en A. PREDIERI y E. GARCÍA DE ENTERRIA , *La Constitución Española de 1978* , Madrid , Civitas , 1984 págs.. 689-717 :“aquí se convierte en una intervención que no necesita estar apoyada en ninguna infracción constitucional o legal, sino en razones de índole política libremente apreciables por el Gobierno y el Senado”.

⁴¹ BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies* , cit. , pág. 138 .

⁴² VÍRGALA, E. , «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución», cit. , págs. 88.

⁴³ A modo de ejemplo: la rebelión fiscal de 1989 en las Islas Canarias sobre la reducción de los derechos de aduana de mercancías europeas pudo suponer un quebranto a las obligaciones legales o constitucionales. Pese a ello, no se llegó a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española.

V.2) Procedimiento para su ejercicio.

Una vez constatado, mediante una sentencia firme, el incumplimiento de una obligación legal o constitucional que contravenga de forma grave los intereses generales de España, el Gobierno podrá hacer efectivo la aplicación del art.155 de la CE. Para iniciar su procedimiento, el Gobierno deberá de requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma que cese en su conducta (Fase Gubernamental), y en caso de negarse a acometerla o desatenderla, se iniciará el procedimiento previsto en el Senado (Fase Senatorial).

Antes de acometer el estudio del procedimiento del ejercicio del art.155 de la CE, sería procedente señalar que el Senado, a pesar de definirse como una «cámara de representación territorial», conforme al art.69.1 de la Constitución Española, no se constituyó como tal. El Senado es una cámara de representación política con el objetivo de representar a la población española de forma similar al Congreso de los Diputados . Aun así, hubo intentos de dotar al Senado de atributos territoriales, como es la existencia de senadores autonómicos nombrados por las Asambleas Legislativas, o que se requiera la autorización del Senado para la aplicación de la coacción estatal⁴⁴.

En cuanto a la primera fase, gubernamental, el Gobierno deberá de efectuar el requerimiento previo y perceptivo al Presidente de la Comunidad Autónoma para que cese en su comportamiento ilegal. Este requisito no encuentra similitud en el art.37 de la LFB, por ello, su establecimiento sirve como garantía de defensa frente al Gobierno Central. Aunque no se menciona expresamente en el art.155 de CE, se ha convenido que sería conveniente solicitar un dictamen del Consejo de Estado⁴⁵, en términos de justificar la excepcionalidad y el carácter técnico de la medida.

⁴⁴ CALAFELL, V.J. , «La Compulsión o Coerción Estatal (Estudio del Artículo 155 de la Consitución Española)» , *Revista de Derecho Político* , núm. 48-49 , 2000 , pág. 122.

⁴⁵ GARCÍA DE ENTERRÍA, E. , *La Ejecución Autonómica de la Legislación del Estado* , Civitas , Madrid , 1983 , pág. 187.

El requerimiento debe de ser realizado por el Consejo de Ministros por ser el órgano colegiado del Gobierno, con necesidad de que se efectúe comunicación al Delegado del Gobierno.

En cuanto al requerimiento formal, no se explicita mención alguna en la legislación, pero sí se entiende, por parte de la doctrina, que deba de estar motivado⁴⁶, el señalamiento de la desobediencia efectuada por la Comunidad Autónoma, la inclusión del acta de la constitución del Consejo de Ministros y las medidas a adoptar.

En cuanto a su plazo de dilación, tampoco se hace precisión en la normativa, teniendo que señalarse su plazo, en función de las circunstancias operantes en los hechos. De esta forma, se persigue dar respuesta a una situación hipotética de aplicación urgente y extraordinaria de este artículo.

Una vez efectuado el requerimiento por parte del Gobierno y transcurrido el plazo de dilación, se entiende cumplido el presupuesto habilitante para su tramitación al Senado, no efectuándose de forma automática, sino dotando de libre discrecionalidad al Gobierno para la aplicación de la fase senatorial u otras medidas políticas.

Si el Gobierno tomara la decisión de aplicar el art. 155 de la CE, en primer lugar, conforme al apartado 1 del art.189 del Reglamento del Senado, deberá de presentar al Presidente de la Cámara «el contenido y el alcance de las medidas propuestas, la justificación de haberse realizado el requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y la manifestación del incumplimiento respectivo».

La adopción del acuerdo de presentación al Senado debe de efectuarse, al igual que el requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, por el Consejo de Ministros.

Recibido el documento y admitido a trámite, conforme al párrafo 2 del art.189 del mismo cuerpo legislativo, la Mesa de la Cámara lo remitirá, junto con la prueba del

⁴⁶ BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies* , cit. , pág. 146.

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y el dictamen del Consejo de Estado, a la Comisión General de las Autonomías o a una Comisión conjunta. Tras constituirse, el Presidente del Senado requerirá al Presidente de la Comunidad Autónoma, a efectos de efectuar las alegaciones pertinentes o nombrar una persona en su defensa y representación.

La formulación de la propuesta corresponde a la Comisión General de las Comunidades Autónomas o en su caso a la Comisión conjunta constituida a tal efecto, conforme al apartado 4 del mismo artículo. Ésta deberá de ser motivada y se mencionará «sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectas». Cabrán tres posibles resoluciones: solicitud que apruebe íntegramente los términos presentados por el Gobierno, solicitud que suponga una desestimación total de la propuesta o solicitud aceptada parcialmente con modificaciones. Los trámites de reunión y funcionamiento serán los establecidos en los art.61 y 68 del Reglamento del Senado en los que se incluye una ponencia que formule el correspondiente informe y la comparecencia de los miembros del Gobierno.

Conforme al apartado 5 del art.189 del mismo texto legal, la aprobación o denegación de la coacción estatal corresponde al Pleno del Senado por mayoría absoluta. Se establece dentro del periodo de debate, dos turnos a favor (en circunstancias corrientes al Gobierno o grupo parlamentario del gobierno) y dos en contra, con la posibilidad de intervención de los Portavoces de Grupos Parlamentarios pero sin permitir, de acuerdo con la literalidad de la norma, modificación alguna sobre propuesta planteada. El acto de aprobación o denegación del Senado tendrá la consideración de ley. El hecho de considerar dicho acto como un acto con fuerza de ley, permitirá, posteriormente, recurrir su decisión ante la vía judicial. No habrá impedimento alguno a que el Senado dejara de prestar el apoyo a las medidas adoptadas, si entendiera la desaparición de la causa, que en su día, motivó su adopción.

Lo que resulta de esta aplicación es lo que E. García Enterría⁴⁷ entiende como un juicio de oportunidad pero sometido a los requisitos formales y materiales propuestos por la Constitución y el Reglamento del Senado: «la aprobación por el Senado de las medidas ejecutivas no podrá acordarse sin una valoración de fondo de todo el problema, esto es, de un verdadero exequatur del requerimiento del Gobierno y de sus razones».

V.3) Medidas de compulsión.

A pesar de no existir en la redacción del art.155 de la CE ninguna mención sobre las medidas posibles a adoptar, hubo intentos por parte de los Grupos Parlamentarios Constituyentes de incluir la previsión de las medidas autorizadas. Ejemplo de ello, fue el Grupo Parlamentario Popular que presentó un voto particular sobre el Anteproyecto de la Constitución⁴⁸: «Las medidas de intervención pueden comprender: a) La suspensión de uno o más órganos de la región. b) La designación de un Gobernador general con poderes extraordinarios».

Las medidas posibles establecidas por la doctrina son las siguientes:

1) Impartición de las instrucciones a las CC.AA. La impartición de instrucciones sería la medida menos gravosa, limitándose a impartir órdenes. Las instrucciones deben entenderse en un plano en el que «el ejecutivo tiene un poder general de mando directo sobre las autoridades autonómicas, un poder de instrucción vinculante, como el que dispone su propio aparato, un verdadero poder jerárquico».⁴⁹ Las órdenes podrían ser singulares o colectivas, pudiéndose dirigir, también, a cualquier autoridad de la Comunidad Autónoma, conforme al art.155.2 de la CE.

2) Subrogación puntual en los actos que ordinariamente debería realizar la Administración autonómica. Esta medida supone la sustitución temporal de los órganos autonómicos superiores que se abstengan de realizar las obligaciones requeridas. No se produce la disolución de los órganos autonómicos, sino que sólo en determinadas

⁴⁷ GARCÍA DE ENTERRÍA, E. , *La Ejecución Autonómica de la Legislación del Estado* , cit. , pág. 187.

⁴⁸ *Constitución Española, Trabajos parlamentarios* , vol.I , pág.39.

⁴⁹ GARCÍA DE ENTERRÍA, E. , *La Ejecución Autonómica de la Legislación del Estado* , cit. , pág. 187.

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

materias la Administración Central, de forma directa o mediante los órganos periféricos (Delegado del Gobierno), ejerce una sustitución en las funciones, persistiendo la constitución de los órganos autonómicos. La doctrina alemana lo ha denominado «secuestro en sentido restrictivo».

3) Privación de efectos jurídicos a las actividades autonómicas desautorizadas. Sólo cabría dicha posibilidad, siempre y cuando, estos actos no pudieran impugnarse en la vía judicial.

4) Restauración de efectos dejados de producir por una actividad ejecutiva desviada.

5) Suspensión de la ejecutividad de acuerdos o resoluciones de los órganos autonómicos con instrucciones sustitutorias si no fuere suficiente lo primero.

6) Medidas de presión o bloqueo económico en las que se encuentra la suspensión de las transferencias de servicios en curso y suspensión de transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial. Estas medidas formarían parte, en consonancia con el ordenamiento suizo, de lo que L. Parejo⁵⁰ denomina «coacción financiera».

7) Suspensión y disolución de los órganos autonómicos. Esta medida resultaría ser la más gravosa de todas, aplicándose únicamente en casos de extrema gravedad. Supondría, a diferencia de la subrogación puntual, la disolución bien del Gobierno Autonómico, Parlamento u otros órganos autonómicos al estilo de la *Sequestration* alemana o la establecida en el art.126 de la Constitución Italiana. Para P. Cruz Villalón⁵¹, resultaría ser la medida esencial a través de la cual se manifiesta la coacción estatal.

No cabría por el contrario, la suspensión o disolución de una Comunidad Autónoma, la cual supondría una alteración del marco constitucional sobre la distribución territorial, alteración solamente facultada mediante el procedimiento de reforma constitucional. Por ello, supondría ser inconstitucional esta última medida «del mismo modo que lo fue la ley de 2 de enero de 1935 que dejó en suspenso el Estatuto de Autonomía de una CA,

⁵⁰ PAREJO, L., *La Prevalencia del Derecho Estatal sobre el Regional*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, pág. 136.

⁵¹ CRUZ VILLALÓN, P., «Coerción Estatal» en J.J. González Encinar (ed.), cit., pág. 60.

hasta que las Cortes acuerden el restablecimiento gradual del régimen autonómico».⁵²

El empleo de las Fuerzas Armadas dentro de la aplicación del art.155 de la CE ha sido otra de las cuestiones candentes a resolver. E. Virgara⁵³ entiende que el empleo de dicho Instituto responde al instrumento de la intervención federal mencionada al principio de este trabajo. Otros ordenamientos como el Alemán excluye cualquier posibilidad de intervención militar en la coacción federal del art. 37 de la LFB. Por tanto, debemos de negar la posibilidad de su utilización.

Al margen de todas ellas, existirían una serie de medidas subsidiarias a la coacción estatal. Éstas resultarían de aplicar los estados de excepción y sitio previstos en el art.116 de la CE, facultando la movilización militar del personal civil, cuando la gravedad de las circunstancias ante des-ordenes públicos extraordinarios requieran tal posibilidad.

En consonancia con las medidas concretas a efectuar, durante todo el proceso de la aplicación del art.155 de la CE deben de regir los siguientes principios:

-Principio de necesidad. Este principio debe de observarse desde su esfera positiva y negativa. Positiva en cuanto a que habilita a tomar todas las actuaciones necesarias para persistir en el resultado de la coacción , y negativa en cuanto que restringe su aplicación únicamente a las medidas aprobadas por el Senado.

-Principio de proporcionalidad y adecuación. Se manifiesta este principio en la tesis dictada por R.Entrena⁵⁴: «no podrá acudirse a una fórmula particularmente grave de intervención cuando quepa obtener los mismos resultados con otras medidas de menor intensidad», es decir, que las medidas adoptadas se correspondan con la gravedad existente y el fin perseguido.

-Principio de transitoriedad. La aplicación del art. 155 de la CE debe de responder a un periodo temporal, pero no impidiendo su aplicación durante el transcurso del periodo

⁵² BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies* , cit. , pág. 163. .

⁵³ VÍRGALA .E. , «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución», cit. ,págs. 62-68.

⁵⁴ ENTRENA CUESTA, R. , «Artículo 155» , *Comentarios a la Constitución* , Civitas, Madrid , 1980 , pág. 2316.

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

necesario para corregir las actuaciones que atentasen contra el interés general de España.

-Principio de concreción. No cabe aprobar por parte del Senado medidas que supongan «plenos poderes»⁵⁵. El Senado deberá de establecer las medidas concretas que legitima al Gobierno Central a usarlas, no permitiéndose aquellas que no se encuentren definidas. Este principio supondrá una doble garantía, una hipotética impugnación de las medidas empleadas y dotar del carácter de especial excepcionalidad de la medida.

-Principio de menor intervención de los derechos autonómicos. No cabe aplicar aquellas medidas que restrinjan con mayor gravedad los derechos autonómicos, existiendo en manos del ejecutivo otras medidas menos gravosas que obtengan los mismos objetivos.

-Principio de adopción de las medidas en relación con una Comunidad Autónoma. Las medidas no pueden ir dirigidas contra sus órganos sino que deben de destinarse al ente territorial colectivo.

V.4) Recursos frente a su ejercicio.

Del mismo modo que sucedía frente las posibles medidas a entablar en la aplicación del art.155 de la CE, no existe referencia expresa en la legislación sobre los posibles recursos a alegar frente a la aplicación de la coacción estatal española.

Antes de analizar los posibles recursos existentes, hay que volver a destacar el carácter de excepcionalidad y gravedad que tiene la coacción estatal, para interpretar la existencia de recursos de una forma garantista en defensa de la protección de la autonomía de la Comunidad Autónoma.

Únicamente, tal y como señala, R. Albertí⁵⁶, serán objeto de recursos los actos «que impliquen un juicio jurídico [...] y quedarán exentos del control jurisdiccional aquellos actos y decisiones que se fundamenten en una estricta valoración de oportunidad [...]».

⁵⁵ CRUZ VILLALÓN, P. , «Coerción Estatal» en J.J. González Encinar (ed.) , cit. , págs. 689-717.

⁵⁶ ALBERTÍ, R. , *El Sistema Jurídico de las Comunidades Autónomas* , cit. , pág. 473.

E. Vír gala⁵⁷ ha entendido que no cabe efectuar recursos frente actos que no tengan la consideración de valor de ley. En esta categoría, se verían incluidos el acto del requerimiento previo ante el Presidente de la Comunidad Autónoma y la solicitud al Senado de la aplicación del art.155 de la CE. Por tanto, únicamente cabría plantearse, ante dichos supuestos, alegar defectos formales en la vía contenciosa-administrativa pero en ningún caso plantearlos por defectos materiales.

Sí cabría interponer, un recurso de inconstitucionalidad frente al acto de autorización del Senado, conforme al art.32 de la LOTC. El hecho de considerar dicho acto como un acto con fuerza de ley, permitiría recurrir su decisión, tanto en el plano material como el formal⁵⁸, ante el Tribunal Constitucional, y delimitar si la atribución que ha otorgado el Senado al ejecutivo no ha vulnerado el marco constitucional.

Frente a las medidas efectuadas por el Gobierno Central⁵⁹ en el ejercicio de sus funciones, debe de señalarse que cabría plantear los recursos ordinariamente reconocidos en la ley, como el recurso contencioso-administrativo regulado en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. También se permitiría acudir al Tribunal Constitucional para valorar indirectamente, mediante la impugnación de cada medida aplicada, la constitucionalidad de la aplicación del art.155 de la CE.

Como garantía de cierre, la doctrina ha interpretado la posibilidad de interponer la vía del recurso de amparo⁶⁰ si se ha entendido que ha existido violación de Derechos Fundamentales.

⁵⁷ VÍRGALA .E. , «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución», cit. ,págs. 106.

⁵⁸ BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies* , cit. , págs. 173-174 .

⁵⁹ CALAFELL, V.J. , «La Compulsión o Coerción Estatal (Estudio del Artículo 155 de la Consitución Española)» , cit. , pág 144.

⁶⁰ GIL ROBLE, J.M. , «Artículo 155. El Control Extraordinario de las Comunidades Autónomas», *Comentarios a la Constitución Española* , Madrid , Edersa , Tomo XI , págs. 499-518.

VI. La aplicación del art.155 de la CE en Cataluña⁶¹.

Sin tener en cuenta hechos anteriores que en su día pudieron ser susceptibles de aplicación del art.155 de la CE, como la consulta popular efectuada el 9 de Noviembre mediante la ley de Consultas Populares no Refrendarias 10/2014 por el Gobierno de la *Generalitat* presidido por Artur Mas, debe de delimitarse que la aplicación del art.155 de la CE se circunscribe a actos cometidos por el *Govern* de la *Generalitat* presidido por Carles Puigdemont.

Tras la convocatoria de elecciones autonómicas por Artur Mas en 2015, *Junts Pel Sí* (lista unitaria conformada por Convergencia de Cataluña y Esquerra Republicana) ganó las elecciones y fue nombrado presidente, Carles Puigdemont, con el apoyo de la CUP.

El gobierno entrante en el ejecutivo catalán tenía como uno de sus objetivos alcanzar la independencia de Cataluña mediante la celebración de un referéndum restringido en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Para dar cobertura legal tanto a la independencia de Cataluña como a la celebración del referéndum redactaron diversidad de leyes: Ley 5/2017 de medidas fiscales, financieras y administrativas para la creación de una Hacienda catalana que iniciara la recaudación de impuestos evitando la entrega a la Hacienda tributaria española; Decreto del Consejo de Gobierno de la *Generalitat* de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, y los planes ejecutivos para la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras estratégicas, así como en relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad; Ley del referéndum de autodeterminación 19/2017, de 6 de septiembre para dar cobertura a la celebración de un referéndum el 1 de octubre de 2017 mediante la proposición de varias preguntas; Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República de 8 de septiembre 20/2017 para crear un marco legal paralelo a la Constitución Española. Todas estas leyes, además de tramitarse vulnerando la normativa del Reglamento del Parlamento Catalán y desatendiendo los criterios del Letrado Mayor, del Secretario General de la Cámara y del

⁶¹ Para la redacción de este apartado se ha hecho uso de los artículos de prensa nacional e internacional remitidos en la bibliografía.

Consejo de Garantías Estatutarias, fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional y suspendidas *de facto* por solicitud del Gobierno en los recursos de inconstitucionalidad, siendo declarada inconstitucional la ley del referéndum de autodeterminación en Sentencia del Tribunal Constitucional 114/2017, de 17 de octubre 2017 .

A pesar de suspenderse dichas leyes a la espera de pronunciamiento judicial, el Gobierno Autonómico prosiguió en su deriva independentista. Como respuesta las Fuerzas Policiales, en particular la Guardia Civil bajo orden de la Fiscalía General del Estado, el 20 de septiembre de 2017 registró las Consejerías de Economía, Relaciones Institucionales y Asuntos Exteriores, Gobernación y Asuntos Sociales con el resultado de 14 detenidos y el acopio de gran información. Mientras se producían dichos registros, las Asociaciones Independentistas, Asamblea Nacional Catalana y *Òmnium Cultural*, convocaron el sitiado de los edificios registrados lo que supuso que tuviera que ser recogida la Secretaria Judicial mediante helicóptero por los disturbios existentes y el destrozo de los vehículos para su transporte. El 1 de Octubre se celebró la consulta del referéndum⁶² con oposición expresa de celebración por parte del Tribunal Constitucional a diversidad de cargos políticos (mandatarios de la *Generalitat* y alcaldes de Cataluña), no sin producirse graves disturbios. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió órdenes expresas de evitar la celebración del referéndum a la Policía Nacional, Guardia Civil y *Mossos d'Esquadra*. Los dos primeros cumplieron con su cometido, sin embargo, los *Mossos d'Esquadra* no sólo se abstuvieron de realizar cualquier tipo de intervención sino que dificultaron las operaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en algunos casos llegando incluso al enfrentamiento.

Realizado el referéndum, sin las garantías democráticas exigidas, se publicaron los resultados: 90,2% (2.044.038) votó a favor del sí y el 8% (177.547) votó a favor del no. Como respuesta a la supuesta represión sufrida por la ciudadanía catalana por parte del Estado Español y sus fuerzas policiales en la jornada del supuesto referéndum, el 3 de Octubre de 2017 se convocó por parte de diversidad de Sindicatos independentistas una paralización social general, conocida como la «Parada del País».

La ley suspendida del referéndum de autodeterminación 19/2017, de 6 de septiembre

⁶² La pregunta consistió : *¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?*

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

establecía en su art.4.4 que «en el recuento de los votos válidamente emitidos si hay más votos afirmativos que negativos implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente». Tras la obtención de dichos resultados, el Parlamento Catalán convocó el 10 de octubre de 2017 una sesión para la Declaración de Independencia de Cataluña con base a la ley suspendida del referéndum de autodeterminación 19/2017, de 6 de septiembre. Aunque dicha sesión se convocó para ello, Carles Puigdemont, tras mencionar: «Asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», suspendió momentáneamente su aplicación para entablar negociaciones con el Gobierno Español: «Propongo que el *Parlament* suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo». No obstante, tras la celebración de la sesión del Parlamento, diputados de *Junts pel Sí* y la CUP firmaron un documento que proclamaba «la república catalana, como Estado independiente».

Este último documento no tenía la consideración de documento jurídico vinculante debido a que no se debatió ni se aprobó en el Parlamento Catalán.

Finalmente, el 27 de octubre de 2017, aun habiendo sido alegada por parte de los letrados del *Parlament* la ilegalidad de la tramitación de la Declaración de Independencia, la Mesa de la Cámara la incluyó en el orden del día. Ésta fue aprobada con el voto secreto en urna de 73 votos a favor (*Junts pel Sí* y la CUP), 10 en contra y 2 en blanco. El resto de partidos como Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular abandonaron el hemiciclo como respuesta a su oposición. El resultado de esta Declaración pretendía dotar de vigencia a la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República de 8 de septiembre 20/2017 declarada en suspenso por el Tribunal Constitucional.

A la par de producirse esta tensión política, en el plano económico, Cataluña sufría una debacle económica que podía tener repercusión en la economía española. Se puso de manifiesto la fuga de multitud de empresas, trasladando sus sedes sociales, tanto de

grandes empresas (IBEX-35) como de PYMES, se redujo considerablemente el nivel de inversiones previstas en Cataluña y se redujo en una gran cuantía las perspectivas de crecimiento.

Nos encontramos, por tanto, ante una vulneración de la normativa legal y constitucional, al haber efectuado la Comunidad Autónoma y el Parlamento Autonómico actos que conducían a un proyecto unilateral de secesión de parte de un territorio, contraviniendo de esta forma la normativa constitucional de acuerdo a la soberanía nacional fijada en el art.1.2 de la Constitución Española, a la indisoluble unidad de la nación española del art.2 de la Constitución Española y al marco territorial autonómico fijado en la Constitución Española y en el propio Estatuto de Autonomía Catalán, sin perjuicio de las responsabilidades penales.

El Tribunal Constitucional desde el inicio del proyecto independentista ha venido declarando la inconstitucionalidad y la anulación de diversidad de actos normativos, tal

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

y como se desprende en diversidad de Sentencias⁶³, Autos⁶⁴ y Providencias⁶⁵. Se puede comprobar que la vulneración a las leyes y a la Constitución se manifiesta tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Existen más de dos decenas de Sentencias, Autos y Providencias resueltas y la cuestiones sobre las que se discute responden a derechos y a principios básicos del Estado de Derecho como son la soberanía nacional, la indisoluble unidad de la nación española y el marco territorial autonómico.

La actuación de tanto la *Generalitat* de Cataluña como del *Parlament* de Cataluña ha sido grave, unilateral, efectiva y sin atender a ningún tipo de seguridad jurídica, al justificarse

⁶³ **STC 114/2017** anula la Ley 19/2017 de 7 de septiembre del Referéndum de Autodeterminación; **STC 90/2017** anula la disposición adicional cuadragésima y diversas partidas presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017; **STC 77/2017** anula parcialmente el Decreto de la Generalitat de Cataluña 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, en lo relativo a la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia y del Decreto de la Generalitat de Cataluña 45/2016, de 19 de enero, de estructuración del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia; **STC 52/2017** anula el Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, y los planes ejecutivos para la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras estratégicas, así como en relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad; **STC 228/2016** anula parcialmente la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea; **STC 259/2015** anula la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015; **STC 138/2015** anula las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre de 2014; **STC 32/2015** anula el Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, así como de sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña; **STC 31/2015** anula parcialmente Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana; **STC 42/2014** anula parcialmente Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

⁶⁴ **ATC 127/2017** Acuerda la imposición de multas coercitivas en la impugnación de disposiciones autonómicas 4333-2017 planteada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 140/2017, de 7 de septiembre, por el que se aprueban normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación; **ATC 124/2017** Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015, promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la Mesa del Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República; **ATC 123/2017** Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015, promovido por el Gobierno de la Nación en relación con determinados acuerdos adoptados por la Mesa y el Pleno del Parlamento de Cataluña el 6 de septiembre de 2017.; **ATC 24/2017** Estima el incidente de ejecución de la Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre, y de los Autos 141/2016, de 19 de julio, y 170/2016, de 6 de octubre, planteado por el Gobierno de la Nación; **ATC 179/2016** Estima el incidente de ejecución de la Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre, y el Auto 141/2016, de 19 de julio, promovido por el Gobierno de la Nación, en relación con una resolución dictada por el Parlamento de Cataluña; **ATC 141/2016** Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015, promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias.

⁶⁵ **Providencia de 12/09/17 de admisión y suspensión** de la ley de transitoriedad jurídica de Cataluña; **Providencia de 07/09/17 de admisión y suspensión** de la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo de la disposición adicional tercera de la denominada Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación; **Providencia de 07/09/17 de admisión y suspensión** del Decreto 140/2017, de 7 de septiembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación; **Providencia de 07/09/17 de admisión y suspensión** del Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña.

actuaciones bajo normativa suspendida. No sólo con ello, no ha atendido requerimiento alguno sobre su actuación, demostrando desobediencia y rebeldía a cualquier tipo de pronunciamiento judicial, bien proviniese del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Todo ello, unido a la tensión social imperante en la sociedad catalana y la comprometida situación económica de la Comunidad Autónoma, ha venido a sostener la actuación del Gobierno de España, para aplicar el art. 155 de la CE por existir una vulneración de la normativa constitucional y legal y contravenir dicha vulneración a un atentado grave al interés general de España.

Ante todos estos hechos, tanto políticos, sociales y económicos, el Gobierno Español aplicó la tramitación del artículo 155 de la CE en su fase gubernamental el 10 de octubre de 2017. El Gobierno Español interpeló a Carles Puigdemont, bajo acuerdo del Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2017, a efectos de requerir si había declarado unilateralmente la independencia de Cataluña, advirtiéndole que en caso de desatender la cuestión aplicaría el art.155 de la CE. El Presidente de la *Generalitat* desatendió dicha emisiva, no contestando a la cuestión que se planteaba, limitándose a reproducir su comparecencia en el *Parlament*: «el pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de electores». Por ello, tras trasladarse otra emisiva que apremiaba a cesar su conducta, se presentó la aplicación del art. 155 de la CE al Senado.

El 21 de Octubre de 2017, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo, en sesión extraordinaria, por el cual desatendía el requerimiento efectuado por Carles Puigdemont, detallando cuales eran las medidas que se iban a trasladar al Senado para su aprobación e implementación. En ese mismo día, el Senado dio trámite a dicho acuerdo con el voto afirmativo⁶⁶ de toda la Mesa salvo uno (PNV), además de otorgar plazo de personación al Presidente de Cataluña o a alguien en su representación. Se fijó para el 26 de Octubre de 2017 la Reunión de la Comisión para el debate y votación de la propuesta sobre el requerimiento del Gobierno, y para el día posterior la tramitación en el Pleno con la sesión de debate y votación.

⁶⁶ 4 del PP, 2 del PSOE

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

Los términos en los que el Gobierno presentó al Senado la aplicación del art. 155 de la CE fueron los siguientes:

-El cese del Presidente, Vicepresidente y Gobierno de la *Generalitat*. Las funciones respectivas serán ejercidas por los órganos o autoridades designadas por el Gobierno, que tendrán la capacidad para dictar y adoptar disposiciones, actos, resoluciones e instrucciones necesarias para su ejercicio, siendo de obligado cumplimiento.

-La capacidad para el «nombramiento, cese o sustitución temporal» de cualesquiera autoridades, cargos públicos del personal de la *Generalitat*, así como de organismo, entes y entidades vinculantes y dependientes y de su sector público empresarial.

-La existencia de un régimen de comunicación o autorización previa de actuaciones, siendo nulos los actos de la Administración de la *Generalitat* que no adopten este requisito. También, la posibilidad de oponerse con carácter vinculante a cualquier resolución sometida al requisito de comunicación.

-En cuanto a las funciones de seguridad y orden público definidas en el art.164 del Estatuto de Autonomía de Cataluña serán asumidas por los órganos designados o creados por el Gobierno, facultándole la posibilidad de impartir instrucciones directas y de obligado cumplimiento a la Policía de la *Generalitat* de Cataluña-*Mossos d'Esquadra* o siendo sustituidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-En cuanto a las funciones de la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria serán asumidas por los órganos designados o creados ad-hoc. Tendrán el objetivo de, en beneficio del interés general, garantizar la prestación de servicios públicos esenciales, estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, en particular, garantizar que los ingresos no se destinen a actividades o fines relacionados con el proceso secesionista.

-En cuanto a las funciones de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales serán asumidas por los órganos creados o designados por el Gobierno de la Nación.

-La convocatoria de elecciones en el plazo de 6 meses por parte del Ejecutivo Español.

-El Parlamento hasta la convocatoria de elecciones seguirá en funcionamiento pero no podrá nombrar a un nuevo Presidente ni designar a otro Gobierno. Podrá seguir ejerciendo la competencia legislativa sin contradecir la medidas aplicadas en la aplicación del art.155 de la CE.

-Cualquier emisión, aprobación de actos, actuaciones, disposiciones, contratos o cualesquiera actuación del Parlamento de Cataluña como de la Administración de la *Generalitat* que contravenga las medidas adoptadas en la aplicación del art.155 de la CE será nula de pleno derecho, pudiendo incurrir en sanción disciplinaria en caso de incumplir las medidas impuestas.

-La duración de las medidas se mantendrán vigentes hasta la toma de posesión de un nuevo Gobierno de la *Generalitat*.

-Se faculta al Gobierno de la Nación a modificar o cesar su aplicación bajo la apreciación de nuevas circunstancias o cese la causa de su adopción respectivamente.

La Comisión encargada del debate y votación fue la Comisión General de las Comunidades Autónomas y Constitucional⁶⁷. En ella, se efectuaron algunas modificaciones destacando la supresión de las medidas adoptadas en referencia al Área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales y la inclusión de una previsión por la cual el Gobierno, en función de los acontecimientos y circunstancias existentes, llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas adoptadas. La supresión de esta medida ha sido una de las cuestiones más polémicas en cuanto la aplicación del art.155 de la CE, dando lugar a un dilatado debate sobre la necesidad de intervenir la radio televisión catalana.

⁶⁷ Compuesta por 15 senadores del Grupo Parlamentario popular, 6 senadores del Grupo Parlamentario Socialista, 2 senadores del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-*En Comú Podem-En Marea*, 1 senador del Grupo Parlamentario *Esquerra Republicana*, 1 senador del Grupo Parlamentario Vasco, 1 senador del Grupo Parlamentario *Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña* Independiente-Colalición Canaria, 1 senador del Grupo Parlamentario Mixto.

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

En la sesión del Pleno, tras el debate, la votación fue acordada por mayoría absoluta tal y como lo requiere el art. 155 de la CE, con 214 votos a favor⁶⁸, 47 en contra⁶⁹ y 1 abstención. A diferencia de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, el PP poseía mayoría absoluta en el Senado, a pesar de ello, pudo sumar a la propuesta los votos positivos del PSOE y de C's.

Tras su aprobación, el Gobierno de la Nación efectuó las siguientes medidas:

-Cese del Presidente de la *Generalitat* y destitución de los miembros del Gobierno de la *Generalitat*. Conforme al Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargadas de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la *Generalitat* de Cataluña, el Presidente del Gobierno asumió las competencias correspondientes al Presidente de Cataluña, la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra para las Administraciones Territoriales asumió las competencias referentes al Vicepresidente de Cataluña, el Consejo de Ministros asumió las materias propias del Consejo de Gobierno de Cataluña y las funciones de cada una de las Consejerías fueron asumidas por los respectivos Ministerios Estatales⁷⁰.

-Convocatoria de elecciones para el 21 de Diciembre de 2017. El Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución disolvía el Parlamento de Cataluña y convocaba elecciones, señalando que la campaña electoral transcurría desde el 5 de diciembre al 19 de diciembre de 2017.

-Destitución del Jefe mayor de los *Mossos d'Esquadra*, Josep Lluís Traperó. La Orden INT/1038/2017, de 28 de octubre, por la que se dispone el cese de don Josep Lluís Traperó Álvarez en la plaza de la categoría de Mayor de la Escala Superior del Cuerpo de *Mossos d'Esquadra*, para la que fue nombrado por Resolución INT/774/2017, de 11 de abril fue dictada por el Ministerio de Interior. En su sustitución fue nombrado Ferrán López.

⁶⁸ PP, PSOE, C's

⁶⁹ Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT

⁷⁰ La descripción de las competencias asumidas por los respectivos Ministerios se encuentra recogidas en el ANEXO I del Real Decreto 944/2017.

Además, se unió la destitución de César Puig, Secretario General de Interior de Cataluña y Pere Soler, Director General de los *Mossos d'Esquadra*.

-La suspensión de funcionarios que se ha facultado conforme al acuerdo adoptado por el Senado ha supuesto el cese de 186 funcionarios en la Administración Catalana⁷¹ y la eliminación de 22 organismos autonómicos⁷².

-La aplicación del art.155 de la CE se mantendrá en vigor hasta el nombramiento de un nuevo Gobierno de la *Generalitat* conforme a las medidas aprobadas por el Senado.

VII. Conclusión.

Tras exponer las medidas impuestas por el Gobierno de España en la aplicación del art.155 de la CE, se observa que se correspondieron con las medidas legitimadas por el Senado.

Se efectuó, bajo acuerdo del Consejo de Ministros, el requerimiento correspondiente al Presidente de la *Generalitat*. Se tramitó al Senado, diligentemente conforme a derecho, las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. Se aprobó, según el Reglamento del Senado, la aplicación del art.155 de la CE con la mayoría requerida y finalmente, se adoptaron las medidas propuestas.

Por tanto, no hay impedimento alguno en afirmar que la actuación del Gobierno de España ha sido en todo momento diligente y constitucional conforme a la normativa imperante, siendo esta actuación un mecanismo de respuesta extraordinario y de última ratio frente a actos que conducían a una situación que fracturaba el Estado de Derecho, la convivencia cívico-social y la autonomía territorial, probando de este modo que la deriva soberanista suponía un atentado directo y grave contra los intereses generales de España.

⁷¹ 29 en la Conserjería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, 43 en la Conserjería de Presidencia y Portavoz, 16 en la Conserjería de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, 10 en la Conserjería de Territorio y Sostenibilidad, 9 en la Conserjería de Educación, 11 en la Conserjería de Gobernación y Administración Públicas, 9 en la Conserjería de Salud, 9 en la Conserjería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, 12 en la Conserjería de Interior, 10 en la Conserjería de Cultura, 10 en la Conserjería de Empresa y Conocimiento, 9 en la Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Alimentación y 9 en la Conserjería de Justicia.

⁷² 13 Embajadas y 9 Otros.

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

Aparejada a esta actuación, los Tribunales, en particular la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, tras las denuncias de la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña, han iniciado las investigaciones penal oportunas a los miembros del *Govern de la Generalitat* y de la mesa del *Parlament* de Cataluña por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia al TC. Como consecuencia del inicio de las investigaciones penales, el ex-presidente Puigdemont, tras ser cesado de su cargo, emigró junto a algunos miembros de su gobierno al extranjero para evitar ser detenido.

Tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017⁷³, se constituyó un nuevo *Parlament* que nombró el 14 de mayo de 2018 *President* de la *Generalitat* a Joaquim Torra Pla. Semanas después, nombró a su gobierno, no sin dificultades legales, lo que permitió cumplir la condición necesaria para el levantamiento del art. 155 de la CE, cesando sus efectos tras el nombramiento de un nuevo gobierno.

⁷³ 36 Diputados C's, 34 Diputados JuntxSí, 32 Diputados ERC-CatSi, 17 Diputados PSC, 8 Diputados CatComú-Podem, 4 Diputados CUP, y 4 Diputados PP. Bloque Independentista 72 Diputados-Bloque Constitucionalista 57 Diputados.

VIII. Bibliografía

VIII.1) Libros y Artículos de Revista

- ALBERTÍ, R. , *El Sistema Jurídico de las Comunidades Autónomas* , Tecnos , Madrid , 1985.
- ÁLVAREZ , E. , «La Coerción Estatal del art.155 CE en la Estructura del Estado Autonómico» , UNED , *Teoría y Realidad Constitucional* , núm. 38 , Madrid , 2006.
- ARROYO GIL, A. , «Unidad, Lealtad y Coerción Federal (o Estatal) en Alemania y España» , *Las posibilidades del Estado jurisdiccional autonómico tras la sentencia del Estatut en la actual situación de crisis Económica y bloqueo institucional* , núm. 31 , Madrid , 2015.
- BALLART, X. , *Coerció Estatal I Autonomies»* , *Estudi de l' Article 155 de la Constitució de 1978* , Barcelona , *Escola d' Administració Pública de Catalunya* , 1987.
- BASSOLS COMA, M. *La Jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española* , Centro de Estudios Constitucionales , Madrid, 1981, pág. 175.
- BASSOLS COMA, M. , «Organización institucional y régimen jurídico de las Comunidades Autónomas» , *Organización territorial del Estado* , Instituto de Estudios Fiscales , volumen I , Madrid , 1984.
- CALAFELL, V.J. , «La Compulsión o Coerción Estatal (Estudio del Artículo 155 de la Constitución Española)» , *Revista de Derecho Político* , núm. 48-49 , Madrid , 2000.

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

- CRUZ VILLALÓN, P. , «Coerción Estatal» en J.J. González Encinar (ed.) , *Diccionario del Sistema Político Español* , Madrid , Civitas , 1984.
- CRUZ VILLALÓN, P. , «La Protección Extraordinaria del Estado» , *Constitución Española de 1978 , Estudio sistemático* , Madrid , Civitas , 1984.
- ENTRENA CUESTA, R. , «Artículo 155» , *Comentarios a la Constitución* , Civitas, Madrid , 1980.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, E. , *La Ejecución Autonómica de la Legislación del Estado* , Civitas , Madrid , 1983.
- GARCÍA TORRES, J. «El artículo 155 de la Constitución y el principio constitucional de autonomía» , *Organización territorial del Estado* , Instituto de Estudios Fiscales , volumen II , Madrid , 1984.
- GIL ROBLE, J.M. , «Artículo 155. El Control Extraordinario de las Comunidades Autónomas» , *Comentarios a la Constitución Española* , Madrid , Edersa , Tomo XI.
- MUÑOZ, S. , *Derecho Público de las Comunidades Autónomas* , Tomo I , Madrid , Civitas , 1982.
- PAREJO, L. , *La Prevalencia del Derecho Estatal sobre el Regional* , Centro de Estudios Constitucionales , Madrid , 1982.
- VÍRGALA, E. , «La Coacción Estatal del Artículo 155 de la Constitución» , *Revista Española de Derecho Constitucional (Nueva Época)* , núm.73 , Madrid , Enero-Abril 2005.

VIII.2) Recursos de Internet

-Buscadores de Información

- Boletín Oficial del Estado <https://www.boe.es>
- Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña <http://dogc.gencat.cat/ca>
- Buscador de Jurisprudencia CENDOJ <http://www.poderjudicial.es/search/>
- Comentarios de la Constitución Española <http://www.congreso.es/consti/index.htm>
- Página Web del Congreso de los Diputados
<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso>
- Página Web del Senado <http://www.senado.es/web/index.html>
- Trabajos Parlamentarios de la Constitución de 1978 http://www.congreso.es/est_consti/

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

-Artículos de Prensa

PRENSA NACIONAL

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

- INFO-LIBRE. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:20.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/28/quot_con_articulo_155_gobierno_esta_autorizado_hacerlo_todo_menos_disolver_autonomia_quot_39954_1012.html

REGISTRO DE LAS CONSEJERÍAS DE LA GENERALITAT

- 20 MINUTOS. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2018 a las 19:20.
<https://www.20minutos.es/noticia/3139151/0/guadia-civil-registro-consejeria-economia-generalitat/>
- CADENA SER. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2018 a las 19:30
http://cadenaser.com/ser/2017/09/21/tribunales/1505978683_365261.html
- EL MUNDO. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2018 a las 19:30.
<http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/22/59c41aa046163f1e748b45a9.html>
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2018 a las 19:10.
https://elpais.com/ccaa/2017/09/20/catalunya/1505885372_273143.html

- HERALDO DE ARAGÓN. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2018 a las 19:30.
<https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/09/20/la-guardia-civil-accede-consejeria-economia-generalitat-1197535-305.html>

CELEBRACIÓN REFERÉNDUM 1 DE OCTUBRE

- CRÓNICA GLOBAL. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:20.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tribunal-constitucional-prohibe-referendum_86027_102.html
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:10.
https://elpais.com/ccaa/2017/10/01/catalunya/1506881493_228687.html
- LA RAZÓN. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:15.
<https://www.larazon.es/espana/los-mossos-dieron-parte-de-la-actuacion-policial-el-1-o-con-orden-de-no-intervenir-EB17705724>

RESULTADOS REFERÉNDUM

- EL PERIÓDICO. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:25.
<https://www.elperiodico.com/es/politica/20171006/resultados-referendum-cataluna-2017-6319340>

HUELGA GENERAL DEL 3 DE OCTUBRE

- EL PAÍS. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:30.
https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/catalunya/1506968019_494468.htmlhttps://elpais.com/ccaa/2017/10/03/catalunya/1507020168_018957.html

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

REQUERIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AL *PRESIDENT DE LA GENERALITAT*

- EUROPA-PRESS. Fecha de Consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:45.
<http://www.europapress.es/nacional/noticia-texto-integro-carta-rajoy-puigdemont-declaracion-independencia-cataluna-20171016120132.html>
- LA RAZÓN. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:40.
<https://www.larazon.es/espana/texto-integro-de-la-carta-de-mariano-rajoy-a-carles-puigdemont-GF15231896>
- LA VANGUARDIA. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:35.
<http://www.lavanguardia.com/politica/20171016/432120021755/cartas-mariano-rajoy-carles-puigdemont-declaracion-independencia-requerimiento-articulo-155.html>
<http://www.lavanguardia.com/politica/20171016/432118814888/carta-respuesta-carles-puigdemont-requerimiento-rajoy-declaracion-independencia.html>

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

- 20 MINUTOS. Fecha consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:55.
<https://www.20minutos.es/noticia/3171778/0/pleno-parlament-dui-155/>
- ABC. Fecha consulta: 29 de marzo de 2018 a las 20:00.
http://www.abc.es/espana/abci-diputados-votan-secreto-declaracion-independencia-201710271525_noticia.html
- EL CONFIDENCIAL. Fecha consulta: 29 de marzo de 2018 a las 20:10.
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-09-06/referendum-cataluna-informe-rajoy-recurso-tc_1439664/
- EL PAÍS. Fecha consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:50.
https://elpais.com/ccaa/2017/10/10/catalunya/1507624143_410500.html

- EL PERIÓDICO. Fecha consulta: 29 de marzo de 2018 a las 20:05.
<https://www.elperiodico.com/es/politica/20171027/parlament-declaracion-independencia-cataluna-6383895>

APLICACIÓN DEL ART.155 DE LA CE

- CADENA SER. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 9:30.
http://cadenaser.com/ser/2017/10/19/politica/1508421996_160908.html
- EL MUNDO. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 9:55.
<http://www.elmundo.es/espana/2017/10/21/59eb4e8b46163f8b438b4613.html>
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 10:00.
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/11/actualidad/1507705023_563756.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508583010_870430.html
- LA INFORMACIÓN. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 9:45.
<https://www.lainformacion.com/espana/el-texto-integro-de-la-aplicacion-del-articulo-155-para-cataluna/6335314>
- LA VANGUARDIA. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 9:50.
<http://www.lavanguardia.com/politica/20171021/432238146154/medidas-155-detalladas.html>
<http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/431924978176/que-es-articulo-155-constitucion-espanola.html>

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

LA INTERVENCIÓN DE LA RADIOTELEVISIÓN CATALANA

- EL CONFIDENCIAL. Fecha de consulta: 13 de abril a las 9:20.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-05/tv3-puigdemont-155-constitucion-junta-electoral-pp-psoe_1472480/
- EL INDEPENDIENTE. Fecha de consulta: 13 de abril a las 9:10.
<https://www.elindependiente.com/politica/2017/10/16/el-gobierno-quiere-asegurarse-el-control-de-tv3-para-garantizar-el-exito-del-155/>
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 13 de abril a las 9:05.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/31/actualidad/1522519325_755633.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/26/actualidad/1509005687_360786.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509091983_253938.html
- LA VANGUARDIA. Fecha de consulta: 13 de abril a las 9:45.
<http://www.lavanguardia.com/politica/20171027/432390011077/articulo-155-gobierno-controlar-tv3.html>

APROBACIÓN EN EL SENADO DEL ART.155 de la CE.

- EL PAÍS. Fecha de consulta: 30 de marzo a las 9:05.
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509105725_777595.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508587435_675312.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509105725_777595.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/19/actualidad/1508437815_728899.html
- EL PERIÓDICO. Fecha de consulta: 30 de marzo a las 9:10.
<https://www.elperiodico.com/es/politica/20171027/texto-integro-acuerdo-pleno-senado-articulo-155-6385013>
- HERALDO DE ARAGÓN. Fecha de consulta: 30 de marzo a las 9:00.
<https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/09/12/el-gobierno-necesitaria-apenas-cinco-dias-para-activar-articulo-155-1196350-305.html>
<https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/10/27/el-boe-publica-resolucion-aprobada-por-senado-con-las-medidas-del-155-1204376-305.html>
- OK DIARIO. Fecha de consulta: 30 de marzo a las 9:15.
<https://okdiario.com/espana/2017/10/27/senado-aplicacion-articulo-155-directo-1452961>

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

- EL DIARIO. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:15.
https://www.eldiario.es/politica/BOE-publica-convocatoria-elecciones-Govern_0_702029838.html
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:15.
https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509139511_567447.html

DESTITUCIÓN DEL *GOVERN DE LA GENERALITAT*

- EITB. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 12:10.
<http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5159606/el-gobierno-espanol-acuerda-medidas-articulo-155/>
- EL CONFIDENCIAL. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 12:20.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/independencia-cataluna-articulo-155-gobierno-cese-puigdemont-junqueras-consellers_1468311/
- EL MUNDO. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 12:15.
<http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/31/59f8b2af22601d3b2c8b4629.html>
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 12:00.
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509114362_109606.html

DESTITUCIÓN DE MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA *GENERALITAT*

- EL PAÍS. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 13:00.
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/02/actualidad/1509647856_354960.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/02/media/1509651378_192448.html
- LA VANGUARDIA. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 13:05.
<http://www.lavanguardia.com/politica/2017/12/01/433330270646/embajadas-cataluna-trabajadores-cese.html>

DESTITUCIÓN DEL JEFE MAYOR DE LOS *MOSSOS d'ESQUADRA*

- EL DIARIO. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 10:35.
https://www.eldiario.es/politica/Interior-Ferran-Lopez-Mossos-Trapero_0_702029989.html
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 10:30.
https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509139511_567447.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/28/actualidad/1509185529_125925.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/28/actualidad/1509165490_375505.html
- LA SEXTA. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018 a las 10:45.
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/ferran-lopez-nuevo-jefe-mossos-pide-lealtad-garantiza-que-mantendra-profesionalidad-lealtad_2017102859f4c47f0cf23ef7aea63099.html

El artículo 155 de la Constitución Española y su aplicación en Cataluña

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

- EL DIARIO. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:15.
https://www.eldiario.es/politica/BOE-publica-convocatoria-elecciones-Govern_0_702029838.html
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:15.
https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509139511_567447.html

TRASLADO DE SEDES DE EMPRESAS

- ECONOMÍA DIGITAL. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 18:20.
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/fuga-empresas-cataluna_545738_102.html
- EXPANSIÓN. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 18:35.
<http://www.expansion.com/empresas/2017/10/06/59d74d6e22601d64698b469f.html>
<http://www.expansion.com/catalunya/2017/11/13/5a09eda246163f13628b45fb.html>
- LIBRE MERCADO. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 18:25.
<https://www.libremercado.com/2018-01-15/continua-la-fuga-panasonic-mitsubishi-electric-y-la-tagliatella-se-marchan-de-cataluna-1276612173/>
- OK DIARIO. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 18:30.
<https://okdiario.com/economia/empresas/2017/12/21/fuga-empresas-cataluna-cuales-huido-hoy-1422674>

RESULTADOS ELECCIONES 21 DE DICIEMBRE 2017

- EL PAÍS. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 21:00.
https://elpais.com/ccaa/2017/12/21/catalunya/1513889253_907059.html

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DE CATALUÑA

- EL MUNDO. Fecha de consulta: 14 de mayo de 2018 a las 17:25.
<http://www.elmundo.es/cataluna/2018/05/14/5af9485422601d28418b45cf.html>
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 14 de mayo de 2018 a las 17:30.
https://elpais.com/ccaa/2018/05/14/catalunya/1526297919_568370.html

NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO DE CATALUÑA

- EL MUNDO. Fecha de consulta: 1 de junio de 2018 a las 19:30.
<http://www.elmundo.es/cataluna/2018/06/01/5b10db69468aeb24128b460a.html>
- EL PAÍS. Fecha de consulta: 1 de junio de 2018 a las 19:25.
https://elpais.com/ccaa/2018/06/01/catalunya/1527830005_475324.html

LEVANTAMIENTO DEL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

- EL MUNDO. Fecha de consulta: 4 de junio de 2018 a las 10:00.
<http://www.elmundo.es/cataluna/2018/06/02/5b1279a446163fb53f8b45f3.html>
- PÚBLICO. Fecha de consulta: 4 de junio de 2018 a las 10:05.
<http://www.publico.es/espana/catalunya-govern-catalunya-toma-posesion-cargos-gritos-libertad.html>

PRENSA INTERNACIONAL

CELEBRACIÓN REFERÉNDUM 1 DE OCTUBRE

- DAILYMMAIL. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 19:00.
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-4940080/Catalan-voter-claims-police-broke-fingers-one-one.html>
- THE GUARDIAN. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 18:40.
<https://www.theguardian.com/world/2017/oct/02/catalan-government-emergency-meeting-spain-independence>
- WASHINGTON-POST. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2018 a las 18:50.
https://www.washingtonpost.com/world/spanish-riot-police-deployed-as-chaotic-vote-in-catalan-independence-referendum-gets-underway/2017/10/01/411b68a2-a2da-11e7-b573-8ec86cdfe1ed_story.html?utm_term=.5b05bd3dfb44

VIII.3)Jurisprudencia

- STGC, España, Tribunal Garantías Constitucionales, 5 de marzo de 1936.
- STC 114/2017, España, Tribunal Constitucional, 17 de octubre de 2017. (Buscador Jurisprudencia Consejo General del Poder Judicial).
- STC 52/2017, España, Tribunal Constitucional, 10 de mayo de 2017 (Buscador Jurisprudencia Consejo General del Poder Judicial).
- STC. 42/2014, España, Tribunal Constitucional, 25 de marzo de 2017 (Buscador Jurisprudencia Consejo General del Poder Judicial).
- STC 31/2015, España, Tribunal Constitucional, 25 de febrero de 2015 (Buscador Jurisprudencia Consejo General del Poder Judicial).